

La Corte Suprema y los derechos civiles



Estudiantes blancos y negros estudian juntos en la Escuela Preparatoria Clinton, en Clinton, Tennessee, en 1964. En la década de 1960 se avanzó mucho hacia la integración racial en Estados Unidos bajo el impulso de la opinión pública y el sistema de tribunales federales.

El papel de la Corte Suprema como miembro igualitario del gobierno se fortaleció con el célebre caso de *Marbury v. Madison* en 1803. En ese juicio, la Corte Suprema declaró por primera vez la inconstitucionalidad de una ley aprobada por el Congreso y firmada por el Presidente, por lo cual ésta quedó anulada. En lugar de ser sólo un tribunal que interpreta la ley, la Corte Suprema tiene el poder de invalidar leyes.

Aun cuando tuvieron que pasar 54 años para que la Corte Suprema declarara la inconstitucionalidad de otra ley, ese órgano ha estado cada día más activo desde mediados del siglo XX, sobre todo en el ámbito de los derechos civiles. Una sucesión de casos memorables fue una fuerza impulsora para la expansión de los derechos de las minorías y la protección de los acusados en juicios penales. Muchos de esos veredictos, aunque fueron controvertidos en su época, se elogian hoy como victorias imperecederas sobre la injusticia. Los siguientes son ejemplos de los casos que han tenido un impacto duradero:

- En 1954, en el caso *Brown v. Junta de Educación*, el tribunal dictaminó que la existencia de escuelas separadas para blancos y negros implicaba una desigualdad intrínseca, y eso dio lugar a un esfuerzo masivo para la integración de las escuelas públicas.
- En 1956, el tribunal confirmó el dictamen de un juzgado menor para anular leyes estatales que eran discriminatorias contra ciertas minorías. Prácticas tales como obligar a los negros a sentarse en la parte trasera de los autobuses (la situación que dio lugar al juicio) quedaron proscritas.
- En el caso *Miranda v. Arizona* de 1967, el tribunal sostuvo que a las personas detenidas en custodia policial se les debe explicar que tienen derecho de permanecer en silencio y de contar con la asesoría de un abogado. Esto se conoce en la actualidad como “los derechos Miranda”.

En éstos y muchos otros casos importantes, la Corte Suprema invalidó leyes y prácticas estatales y locales cuyo efecto consistía en negar la igualdad de derechos de las minorías ante la ley. Una base importante de esas decisiones fue la Decimacuarta Enmienda, que en una de sus partes dispone lo siguiente:

“Ningún estado aprobará o hará cumplir ley alguna que restrinja los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de Estados Unidos; ni ningún estado privará a persona alguna de su vida, su libertad o su propiedad sin el debido procedimiento legal; ni negará a nadie, dentro de su jurisdicción, la protección de las leyes en un plano de igualdad”.

“... el poder judicial es la salvaguarda de nuestra libertad y nuestras propiedades bajo la Constitución”.

Charles Evans Hughes, Presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, 1930-1941